



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO VEINTISÉIS ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., siete (7) de julio de dos mil veinte (2020)

RADICACIÓN: 11001-33-35-026-2019-00381-000
PROCESO: EJECUTIVO
EJECUTANTE: MARITZA DEL CARMEN BERDUGO QUIROGA
EJECUTADA: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES
- COLPENSIONES
ORDINARIO: 1100133335026-2014-00644-00

La parte ejecutante, a través de apoderado judicial, ha solicitado a este juzgado, que previo los tramites de un proceso ejecutivo, se libre orden de pago a su favor y en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES**, con el fin de obtener la **indexación de la primera mesada** por un valor total de **VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN PESOS (\$23.483.071) m/cte**, suma que resulta de la diferencia entre lo pagado por Colpensiones mediante Resolución SUB 69634 del 20 de marzo de 2019, y la liquidación conforme lo establecen las sentencias proferidas en primera y segunda instancia.

De la misma manera, solicita el pago de intereses moratorios causados conforme a los artículos 141 de la Ley 100 de 1993 y artículo 9 de la Ley 797 de 2003 que modifica el artículo 33 de la Ley 100 de 1993.

Así las cosas, de conformidad con lo allegado al plenario, debe el Despacho resolver si es viable o no librar mandamiento de pago en el presente asunto.

Para el efecto, se analizará lo siguiente:

A. PRETENSIONES

La activa solicita se libre mandamiento ejecutivo de pago de la siguiente manera:

*“PRIMERA: Que se libre mandamiento ejecutivo a favor de la Señora **MARITZA DEL CARMEN BERDUGO QUIROGA** y en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES, COLPENSIONES**, por LA MAYOR DIFERENCIA DEJADA DE PAGAR EN EL ACTO ADMINISTRATIVO O RESOLUCIÓN N° **SUB 69634 DEL 20 DE MARZO DE 2019**, “RESUELVE UN TRÁMITE DE*

PRESTACIONES ECONÓMICAS EN EL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACIÓN DEFINIDA (VEJEZ – CUMPLIMIENTO SENTENCIA)” QUE SUPUESTAMENTE (sic) DIO CUMPLIMIENTO A LAS SENTENCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA INSTANCIA, PROFERIDAS POR EL JUZGADO VEINTISEIS (26) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., DE FECHA 1 DE JULIO DE 2016, Y, LA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA SECCION SEGUNDA, SUBSECCION F, EN SENTENCIA DE EFCHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2017, DENTRO DEL PROCESO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO N° 2014 – 00644.

2. – Por la suma de los intereses moratorios causados conforme a los artículos 141 de la ley 100 de 1993 y el artículo (sic) art. 9° de la Ley 707 de 2003 que modifica el art. 33 de la Ley 100 de 1993.”

B. ARGUMENTACIÓN JURÍDICA

Manifiesta el abogado de la parte actora, que la demanda ejecutiva se fundamenta en el hecho ostensible de que la Resolución SUB 69634 del 20 de marzo de 2019, no dio cumplimiento pleno a las sentencias de primera y segunda instancia toda vez que, no se indexó la primera mesada, tal como lo ordena las sentencias de primera y segunda instancia, por lo que se evidencia una diferencia entre lo pagado por Colpensiones y la liquidación conforme lo establecen dichas providencias.

C. CONSIDERACIONES

Como primera medida, el artículo 104 de la ley 1437 de 2011, indica en el numeral 6to ibídem, que esta Jurisdicción conocerá, entre otros, de “*Los ejecutivos derivados de las condenas impuestas y las conciliaciones aprobadas por esta jurisdicción, así como los provenientes de laudos arbitrales en que hubiere sido parte una entidad pública; e, igualmente los originados en los contratos celebrados por esas entidades.*”.

En este sentido, el artículo 297 del C.P.A.C.A., prevé:

“Artículo 297. Título ejecutivo. *Para los efectos de este Código, constituyen título ejecutivo:*

1. Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas dinerarias. (...)”

Ahora bien, teniendo en cuenta que, en la Jurisdicción Contencioso Administrativo, tiene plena vigencia todo el articulado de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expidió el Código General del Proceso¹, se tiene que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los aspectos no

¹ CONSEJO DE ESTADO. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SECCIÓN TERCERA. SUBSECCIÓN C. Consejero Ponente: ENRIQUE GILBOTERO. Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil catorce (2014). Radicación número: 05001233100020110046201 (44.544). Demandante: Jerlis Antonio Mercado Castillo y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa Ejército Nacional. Referencia: Acción de Reparación Directa.

regulados en el mismo se seguirán las reglas del Código de Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso).

Conforme a lo anterior, se observa que el artículo 422 del Código General del Proceso, en relación con las calidades particulares del título ejecutivo, determinó frente a providencias judiciales lo siguiente:

“Artículo 422. Título ejecutivo. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

Así las cosas, de conformidad con los artículos reseñados, el proceso ejecutivo tendría varios derroteros para tener en cuenta en casos como el presente:

1. Solicitud: A través de memorial radicado el abogado de la señora Maritza del Carmen Berdugo Quiroga, solicitó al juzgado que se libre mandamiento ejecutivo en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, con el fin de obtener la indexación de la primera mesada.

Luego entonces, se encuentra satisfecho el requisito de solicitar la ejecución con base en la sentencia, ante el juez del conocimiento, para que se adelante el proceso ejecutivo.

Ahora bien, adicional a la solicitud, se hace preciso analizar si la misma fue elevada dentro del término que la Ley que otorga para ello.

Al respecto, el inciso K del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, norma vigente al momento de la expedición de la sentencia, frente a la oportunidad de presentación de la acción ejecutiva determinó:

“Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(...)

k) Cuando se pretenda la ejecución con títulos derivados del contrato, de decisiones judiciales proferidas por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en cualquier materia y de laudos arbitrales contractuales estatales, el término para solicitar su ejecución será de cinco (5) años contados a partir de la exigibilidad de la obligación en ellos contenida. (...)

Negrilla y subraya fuera de texto original

A su vez, el artículo 192 del mismo ordenamiento, dispuso en su inciso segundo:

“Artículo 192. Cumplimiento de sentencias o conciliaciones por parte de las entidades públicas.

(...)

Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. *Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada. (...)*

Negrilla y subraya fuera de texto original

Así las cosas, en principio el ejecutante contaba con un término de cinco años a partir de la exigibilidad del derecho, para la presentación de la demanda ejecutiva, es decir dicho término inicia luego de vencidos los 10 meses que tiene la entidad para realizar el pago.

En el plenario se constata que el ejecutado es la **Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones**.

En este sentido, en el plenario se evidencia que la demanda fue radicada ante la Oficina de Apoyo Judicial para los Juzgados Administrativos el 15 de agosto de 2019 (fl.1°), circunstancia por la cual en los términos expuestos por el artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la presente demanda se encuentra presentada dentro del término legal, teniendo en cuenta que la ejecutoria de la sentencia fue del 5 de diciembre 2017.

Por lo anterior, es claro que la demanda ejecutiva fue presentada dentro del término de Ley.

2. Título Ejecutivo: En el presente asunto, el título ejecutivo lo constituyen varias actuaciones a saber:

Por un lado, se encuentra la sentencia proferida por este Juzgado el 1° de julio de 2016, la cual accedió a las pretensiones de la demanda, ordenando a la entidad la reliquidación de la pensión de jubilación de la ejecutante en cuantía equivalente al 75% del salario promedio mensual del año anterior a la adquisición del status; de la misma manera se ordenó el pago de las diferencia, las cuales debían ser reajustadas y actualizadas, así como el respectivo descuento de aportes para pensión sobre los factores respecto de los cuales no se haya efectuado dicha deducción. (folios 22-34)

Sin embargo, el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca al desatar el recurso de apelación elevado por la entidad demandada, revocó la sentencia

de primera instancia en sus numerales tercero, quinto y sexto, modificando únicamente el numeral 4, en el cual ordenó a la entidad demandada realizar el pago de la pensión a partir del 21 de enero de 2013, sin condicionar el retiro definitivo del servicio y con efectividad para su pago a partir de esa fecha.

Seguidamente, debe tenerse como tal, la Resolución SUB 69634 del 20 de marzo de 2019, emanada de COLPENSIONES, en virtud de la cual se da cumplimiento al fallo antes aludido, disponiendo la reliquidación de la pensión de jubilación. (fls. 50-53).

Conforme a lo anterior, para el Despacho se torna indispensable estudiar las sentencias proferidas, juntamente con los actos de ejecución, para determinar si se configura o no un título ejecutivo, y si se cumplen o no los requisitos exigidos por el artículo 422 del Código General del Proceso.

En este sentido, se reitera que lo pretendido por la parte actora, es la “suma de **VEINTITRÉS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETENTA Y UN PESOS (\$23.483.071) m/cte**, suma que resulta de la diferencia entre lo pagado por Colpensiones mediante Resolución SUB 69634 del 20 de marzo de 2019, y la liquidación conforme lo establecen las sentencias proferidas en primera y segunda instancia.

Ahora bien, analizado el expediente ejecutivo junto con el ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho en su totalidad, se observa que el H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca en providencia de data 10 de noviembre de 2017, revocó la sentencia proferida por este Despacho Judicial, y **únicamente** se refirió sobre el pago de la pensión la cual debía realizarse a partir del 21 de enero de 2013, sin condicionar el retiro del servicio de la actora y con efectiva para su pago desde esa fecha por no operar la prescripción de mesadas.

Conforme con lo anterior, se debe reiterar que el artículo 422 del Código General del Proceso, en relación con las calidades particulares del título ejecutivo, determinó que ***“Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial (...)”***

Es decir, si la obligación no se encuentra consignada, en este caso en la sentencia, no es posible para el juzgador del proceso Ejecutivo, darle un alcance que no corresponde o que excede a lo dispuesto en el título, pues se basaría en una obligación que no es expresa.

Por lo anterior, el Despacho considera que en el presente asunto, aun cuando existe un título ejecutivo, el mismo no contiene una obligación clara,

expresa y exigible por la que se pueda ejecutar a COLPENSIONES, en tanto que, lo pretendido dentro del presente asunto, aun cuando fue ordenado en primera instancia, dicha decisión fue revocada por el Tribunal al desatar la alzada, no siendo dable para esta agencia judicial darle una interpretación al título que no tiene, u omitir las órdenes dadas en el mismo.

Al respecto, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en proveído adiado 15 de abril de 2016, M.P. GERMÁN RODOLFO ACEVEDO RAMÍREZ, señaló: *“Con fundamento en lo anterior, es dable concluir que el a quo incurrió en un error al declarar probada parcialmente la excepción de pago y continuar adelante la ejecución, como es, realizar la actualización de la primera mesada pensional que había sido ordenada pagar al demandante para el año 1997, **extralimitándose de esta manera en lo que se había ordenado en la sentencia que presta mérito ejecutivo**, en la que ya se reliquidó la pensión y se ordenó efectuar el pago de un monto pensional, **suma que no debe ser sujeto de actualización, pues estamos ante un proceso ejecutivo en el cual se debe estar a lo ordenado en el título, sin que haya lugar a interpretaciones y mucho menos como en el sub lite, a ordenar pagos que no han sido determinados en el mismo**. Esto por cuanto, conforme lo ordenó el título sólo hay lugar a ordenar la indexación de las diferencias resultantes entre el valor cancelado y el valor que resultó pagar, junto con el pago de los respectivos reajustes anuales.”* (Negrita del Despacho)

Corolario de lo anterior, el despacho **NEGARÁ EL MANDAMIENTO EJECUTIVO** conforme lo pretendido por la demandante, por inexistencia de título ejecutivo.

En virtud de lo expuesto, el Despacho,

RESUELVE:

PRIMERO. - NEGAR EL MANDAMIENTO EJECUTIVO, de conformidad con las motivaciones que anteceden.

SEGUNDO. - Se reconoce personería jurídica al abogado **MANUEL ROMUALDO DE DIEGO RAGA**, identificado con cédula de ciudadanía número 2.894.672 de Bogotá y portador de la tarjeta profesional 43.666 del C. S. de la J., como apoderado principal de la demandante, en los términos y para los fines del poder visible a folios 11 y 12 del expediente.

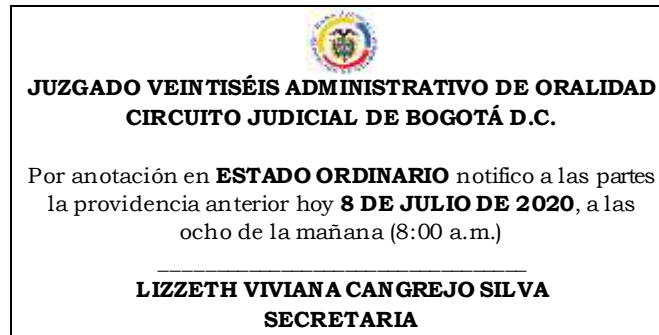
TERCERO Por secretaría, devuélvanse los anexos de la demanda sin necesidad de desglose.

CUARTO. - Ejecutoriado el presente auto, archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ANDRÉS JOSÉ QUINTERO GNECCO
Juez

FV



Firmado Por:

**ANDRES JOSE QUINTERO GNECCO
JUEZ CIRCUITO
JUZGADO 026 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO BOGOTA-
CUNDINAMARCA**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

cc71b50c41f832a03391072e23d4f29c5eb7d35297c67f0528bd51d2c0eadd72

Documento generado en 04/07/2020 06:45:58 AM